

Santiago, veintidós de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos RIT O-481-2019 RUC 1940206642-6, del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, por sentencia de seis de marzo de dos mil veinte, se acogió, parcialmente, la demanda por despido indirecto y nulo, deducida por don Rodrigo Alejandro Norambuena Gutiérrez, don Edinson Patricio Encina Jorquera, don Juan Guillermo Aubele Acuña y don Guillermo Eulogio Lozier Vilches, en contra de la empresa Constructora Proessa SpA, por lo que fue condenada a pagar los montos que se indican en lo resolutivo, por lucro cesante, remuneraciones insolutas y feriado proporcional, y a las prestaciones que se devenguen hasta la convalidación del autodespido, imponiéndose a las demandadas Gobierno Regional Metropolitano y Municipalidad de Huechuraba, la obligación de solucionar, en forma solidaria, las sumas adeudadas por remuneraciones y feriado proporcional, desestimándola en lo demás.

Los demandantes presentaron recurso de nulidad, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Talca, mediante sentencia de seis de octubre de dos mil veinte.

En contra de este fallo, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos a relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que la materia de derecho propuesta, consiste en determinar el *“sentido y alcance que corresponde atribuir a la parte final del inciso primero del artículo 183-B del Código del Trabajo, en orden a determinar si la limitación temporal de la responsabilidad solidaria que se reconoce a favor de la empresa principal, la exime de los efectos de la nulidad del despido, consagrada en el artículo 162 del estatuto laboral”*.

Para los recurrentes, la correcta decisión se contiene en los fallos que



acompañan a modo de contraste, por cuanto el límite temporal a que se refiere el artículo 183-B del código del ramo, no impide aplicar y extender los efectos de la nulidad del despido a las empresas mandantes, por cuanto el hecho causante ocurrió estando vigente el régimen de subcontratación y obligadas, por tanto, a fiscalizar el oportuno cumplimiento de las prestaciones laborales, entre estas, la de enterar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, devengadas durante el tiempo en que aquellas obtuvieron los beneficios provenientes del trabajo de los dependientes, por lo que no puede eximirseles de esta carga; razones por las que solicitan la invalidación del fallo recurrido y se dicte el de reemplazo que indican.

Tercero: Que para la procedencia del recurso de unificación, es requisito fundamental que existan distintas interpretaciones respecto de una misma materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se sostengan concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia doctrinal que se deba uniformar.

En tal sentido, para dar lugar a este recurso, se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente homologables con aquellos contenidos en las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que resuelve la controversia, cuando se enfrenta con una situación equivalente a la de un fallo anterior en sentido diverso, decisión que dependerá del marco fáctico establecido en cada caso.

Cuarto: Que, por lo expuesto, se deben considerar en forma previa los hechos establecidos en la instancia:

1.- Los demandantes comenzaron a prestar servicios como profesional residente, jefe de obra, prevencionista de riesgos y coordinador general de terreno, para la demandada principal, Constructora Proessa SpA, desde el 18 de febrero, 5 de marzo, 6 de mayo y 2 de mayo de 2019, respectivamente, en la obra licitada “Centro Cultural Huechuraba”, según convenio suscrito por la Municipalidad de esa comuna y el Gobierno Regional Metropolitano, que comenzaron a ejecutarse el 20 de febrero de ese año y que debían concluir en un plazo de 540 días, hasta el 13 de agosto de 2020.



2.- El 8 de agosto de 2019, la Municipalidad de Huechuraba puso término al contrato con la demandada principal, por abandono de las obras y falta de ejecución del proyecto.

3.- Los demandantes se autodespidieron los días 20 y 23 de agosto de 2019, invocando, al efecto, la causal contenida en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, por cuanto la empresa contratista dejó de pagar sus remuneraciones y cotizaciones previsionales, y por no otorgar el trabajo convenido, hechos que fueron comprobados en la instancia.

4.- La vinculación de los demandantes con la demandada principal y las empresas mandantes, fue en régimen de subcontratación.

5.- La Municipalidad de Huechuraba y el Gobierno Regional Metropolitano, no ejercieron el derecho de retención e información contenido en el artículo 183-C del Código del Trabajo.

Quinto: Que, sobre la base de los hechos descritos, la judicatura del fondo dio lugar a la demanda por despido indirecto y nulo, considerando que la empresa contratista infringió gravemente las obligaciones contractuales, según lo dispuesto en los artículos 160 número 7 y 171 del Código del Trabajo, y teniendo presente que las mandantes no fiscalizaron su oportuno cumplimiento, declaró que debían responder solidariamente, limitando esta condena a pagar las remuneraciones insolutas y al monto compensatorio por feriado proporcional, imponiendo a la constructora Proessa SpA, además, la solución del lucro cesante por las prestaciones que dejaron de percibir hasta el vencimiento del plazo y de las provenientes de la nulidad del autodespido, precisando, en relación con el alcance restringido dado a esta sanción, que se debía excluir a las dueñas de la obra, por cuanto la Municipalidad de Huechuraba finalizó el contrato de construcción días antes de la desvinculación de los dependientes, tras abandonar las faenas, por lo que, de imponérseles los efectos provenientes de la nulidad del despido, se extenderían más allá del tiempo de duración de la subcontratación, argumento que entiende congruente con los artículos 183-B y 183-D del citado código, entregando, al efecto, la siguiente argumentación: *“advirtiendo que a la fecha en que se produjo el auto despido, efectivamente existían diversos períodos insolutos que las demandadas adeudaban al actor en materia de seguridad social, por aplicación del relación el artículo 162 incisos 5° y 7° del Código del Trabajo, el tribunal igualmente acogerá la petición de declarar la nulidad de los despidos, y a consecuencia de ello, la sanción de condenar a la demandada a verificar el pago*



de las remuneraciones hasta la convalidación de este. Ahora bien, habiéndose acogido la indemnización por lucro cesante entablada, la cual implica en la práctica un pago de las remuneraciones mensuales hasta el día 13 de agosto de 2020, podría implicar respecto de las demandantes, recibir un doble pago lo que a todas luces implicaría un enriquecimiento sin causa. Debido a ello, y con el objeto de evitar dicha consecuencia, estimándose que se encuentran satisfechas las remuneraciones hasta el término del contrato esto es, 13 de agosto de 2020, no devengará sino hasta esa fecha la obligación de pagar las remuneraciones pactadas y hasta la convalidación de estos, según la base de cálculo de la última remuneración mensual”; razón que permite comprender el contenido del numeral III de la parte resolutive, que declaró: “el despido del demandante es nulo y en consecuencia se condena a la demandada al pago de las remuneraciones y demás prestaciones, consignadas en el contrato de trabajo que se devenguen desde el día 13 de agosto de 2020, hasta la convalidación del despido, a razón de la remuneración pactada”; y, en cuanto a la extensión y alcance temporal de la responsabilidad solidaria de las mandantes y previa cita del artículo 183-B del Código del Trabajo, consideró que, “en relación a la demanda de lucro cesante, teniendo presente los hechos que se tuvieron por asentados, especialmente en cuanto al término del contrato que vinculaba a la empresa constructora Proessa SpA con la Municipalidad de Huechuraba, este finalizó con fecha 8 de agosto de 2019 mientras que los autodespidos se produjeron todos a contar desde el 20 de agosto de 2019 en adelante, de tal forma, que a la fecha de los despidos, en razón de los cuales se origina la indemnización por años por lucro cesante, se estima no es posible extender la responsabilidad más allá de ese periodo por el cual se encontraban vinculados, dado que son indemnizaciones que se produjeron en razón de un despido ocurrido fuera de la vigencia de la relación contractual, sin perjuicio de por su propia naturaleza implicaría un exceso al tiempo o periodo durante el cual el actor presto servicios en Régimen de Subcontratación, en razón de lo cual se rechazará la responsabilidad de la Municipalidad de Huechuraba y Gobierno Regional respecto del lucro cesante. En el mismo sentido no corresponde hacerlos responsables, de la sanción aplicable a la nulidad del despido, dado que al igual que el caso anterior, implicaría vulnerar los límites temporales establecidos por el artículo 183D del Código del Trabajo”.

La Corte de Apelaciones de Talca, conociendo el recurso de nulidad deducido por los demandantes, fundado en la causal contenida en el artículo 477



del Código del Trabajo, por infracción a lo dispuesto en sus artículos 162 incisos quinto y séptimo, 183-B y 183-D, y 19, 22 y 24 del Código Civil, consideró que “es un hecho asentado en la causa que el contrato que vinculó a la sociedad Proessa SpA con la Municipalidad de Huechuraba, finalizó el 8 de agosto de 2019, mientras que los auto-despidos se produjeron todos a contar del 20 del mismo mes en adelante, de lo cual debe concluirse que a la fecha de los hechos que motivaron las prestaciones demandadas, la relación contractual entre aquellos estaba expirada, razón por la que no es posible considerar aplicable una responsabilidad solidaria más allá del límite temporal establecido en el Art. 183 B. A su vez, no está demás agregar que el auto-despido es una decisión del trabajador que en este caso fue ejercida cuando la relación de su empleadora directa con la empresa mandante había terminado, por lo que las eventuales responsabilidades de ésta quedaron fijadas en la fecha de expiración del contrato celebrado entre ambas. Es por ello que aquellas prestaciones que efectivamente tuvieron su causa directa dentro del límite temporal que señala la norma citada y que tienen su causa en el ámbito del control de la empresa principal, sí fueron declaradas solidarias en relación con las personas jurídicas demandadas”, precisando que “la indemnización ordenada pagar a los actores, cuya solidaridad pretende el recurrente, corresponde a lucro cesante por incumplimiento contractual, lo cual no obedece a una prestación de carácter estrictamente laboral, sino que tiene su base en instituciones propias del ámbito civil, razón por la cual no se ajusta a lo dispuesto en el Art. 183 B que hace responsable a la empresa principal de las obligaciones labores y previsionales de dar que obliguen a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que corresponda por término de la relación laboral. Y, como se observa de la sentencia impugnada, la indemnización ordenada pagar no corresponde a una indemnización por término de la relación laboral, la cual sí tiene un carácter laboral, sino por lucro cesante, la que no está incluida en las situaciones que contempla del Art. 183 B del Código del Trabajo”, afirmación que entiende corroborada por “la circunstancia de que la nulidad del despido, tiene una finalidad sancionatoria y, como tal, su aplicabilidad debe ser analizada con criterios restrictivos”, concluyendo, en consecuencia, que “la declaración de solidaridad de Municipalidad de Huechuraba y de Gobierno Regional Región Metropolitana, respecto de las prestaciones derivadas de remuneraciones devengadas y feriado proporcional, se ajusta a la ley puesto que ellas tienen una



naturaleza laboral y se devengaron en el ámbito de control de la empresa principal y dentro del tiempo en que estuvo vigente el contrato de ésta con sus mandantes. A su vez, la desestimación de solidaridad respecto de la indemnización a título de lucro cesante, por lo precedentemente dicho, no constituye infracción legal, por lo que no hay razones que ameriten la invalidación de la sentencia cuestionada”.

Sexto: Que para sostener la concurrencia de dictámenes divergentes, los demandantes ofrecieron tres sentencias de contraste pronunciadas por esta Corte en los autos Rol N°3.689-2018, 28.586-2014 y 7.502-2010, de 16 de enero de 2019, 23 de septiembre de 2015 y 31 de marzo de 2011, respectivamente; y, por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en los autos Rol N°84-2009, de 26 de abril de 2010, que no será considerada para los efectos de realizar la labor de confrontación, por cuanto se ignora su estado procesal, ya que no se presentó junto al respectivo certificado de encontrarse firme y ejecutoriada, inobservancia que constituye un obstáculo insalvable para alcanzar el propósito unificador, puesto que se trata de una resolución susceptible de un recurso excepcional que pudo alterar la decisión que contiene.

Los tres fallos dictados por esta Corte, en tanto, resolvieron sendos recursos de unificación de jurisprudencia deducidos en cada caso por los demandantes, y se pronunciaron sobre la misma materia de derecho que la propuesta en estos autos, consistente en determinar la correcta interpretación del artículo 183-B del Código del Trabajo y declarar si la sanción establecida en su artículo 162, alcanza o no a la dueña de la obra, observando, además, que para decidir, se presentaron similares fundamentos.

En tal sentido –siguiendo los razonamientos contenidos en la sentencia dictada en los autos Rol N°3.689-2018–, se consideró que el artículo 183-B del Código del Trabajo, *“hace solidariamente responsable a la empresa principal y al contratista de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a sus contratistas y subcontratistas, en su caso, en favor de sus trabajadores, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que corresponda pagar al término de la relación laboral, de modo que la empresa principal debe responder, solidaria o subsidiariamente, del pago de las remuneraciones de los trabajadores, del entero, en el órgano pertinente, de las cotizaciones previsionales, de las indemnizaciones sustitutiva por falta de oportuno aviso previo y por años de servicio, con su incremento, y de la compensación de feriados, que deben solucionarse con motivo del término de la relación laboral, sin perjuicio de otra que pueda calificarse como*



obligación laboral y previsional de dar o a título de indemnización legal por el evento señalado; y la responsabilidad solidaria de aquélla surge cuando no ejerce el derecho de información y de retención, pues si se ejercitan torna a subsidiaria, por lo tanto, la primera se hace efectiva por su propia negligencia. Esta conclusión está acorde con los objetivos de la ley que regula el trabajo en régimen de subcontratación, en la medida que establece un sistema de protección a los trabajadores que se desempeñan en dichas condiciones, ya que instituyó respecto de la empresa principal una responsabilidad solidaria y subsidiaria en lo concerniente a las obligaciones laborales y previsionales que debe asumir el contratista respecto de su dependiente, para, en definitiva, estimular y velar por el cumplimiento efectivo y oportuno de dichas obligaciones. Además se debe tener presente que la nueva normativa que regula el trabajo en régimen de subcontratación no excluye a la empresa principal de la aplicación de la ineficacia del despido de que trata el artículo 162 del Código del Trabajo, y tampoco fue materia de discusión o indicación durante la tramitación de la ley que la contiene -N° 20.123- lo que se puede apreciar del examen de la discusión parlamentaria llevada a cabo”, agregando, “conforme a lo ya razonado, y habiéndose establecido que la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo es aplicable a la empresa principal, sin que sea posible que esgrima el límite previsto en el artículo 183-B del Código del Trabajo, queda obligada al pago total de la deuda en los mismos términos que el deudor principal”; unificándose la jurisprudencia dispar, en el siguiente sentido: “la empresa contratista no puede esgrimir el límite previsto en el artículo 183-B en el evento que su contratista haya sido objeto de la sanción dispuesta en el artículo 162 del estatuto laboral, máxime, si es un hecho establecido que el no pago de las respectivas cotizaciones tuvo lugar en la época en que la empresa final debía ejercer las facultades de información y retención, y al no haberlo hecho, queda obligado al total de la deuda en términos solidarios”.

Séptimo: Que, a diferencia de los pronunciamientos acompañados, en la decisión recurrida concurre una particularidad que impide sostener que se está frente a decisiones divergentes y susceptibles de unificación, tal como se define en el artículo 483 del Código del Trabajo, por cuanto, en estos autos, la judicatura decidió condenar a la empresa contratista a pagar los montos resultantes de la indemnización por lucro cesante, excluyendo a las mandantes, desde el día en que comunicaron su desvinculación, hasta el 13 de agosto de 2020, instante a partir del cual, comenzarían a surtir efecto las consecuencias sancionatorias



previstas por el legislador en el artículo 162 del citado código, argumentando que, de esta forma, se impediría la obtención de un enriquecimiento impropio de los dependientes, puesto que, en caso contrario, percibirían un doble pago, entendiéndose que en el intertanto, tales consecuencias, de especial carácter patrimonial, estarían en suspenso, hasta la llegada del plazo aludido, resolución que, en este aspecto, no fue impugnada y que se mantuvo, por tanto, inalterada en el fallo recurrido, advirtiéndose que tal argumentación, que escinde la forma como las deudoras deberán concurrir al pago de las obligaciones laborales generadas a partir de los incumplimientos en que incurrió la contratista, es una cualidad singular que califica a esta decisión, surgida de una interpretación normativa que, aun cuando no se comparta en esta sede, que dejó de ser casacional, la separa de los fundamentos entregados en las sentencias acompañadas al recurso, coincidentes entre sí, aunque no resuelven cómo una pluralidad de obligados, en el sentido antes descrito, deben responder al mismo acreedor, si se presentan elementos que en el fallo de la instancia se estimaron determinantes, como una condición especial y adecuada para alterar los efectos de la referida sanción, y dado que el arbitrio que se analiza es excepcional y de estricto derecho, procedente sólo si concurren decisiones divergentes en los términos ya precisados, se advierte que en el caso actual, no se está frente a tal posible analogía, ya que la línea seguida en la instancia, inalterada en el fallo de nulidad, resulta anómala y se disocia de los presupuestos considerados en los de contraste para resolver.

Octavo: Que la particularidad descrita, obsta a la labor de confrontación de los dictámenes que, según postulan los demandantes, contienen decisiones divergentes, razón suficiente para desestimar el arbitrio analizado.

Por estas consideraciones y disposiciones citadas, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil veinte por la Corte de Apelaciones de Talca.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°135.566-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H. y Ministro Suplente señor Roberto Contreras O. No firma la Ministra señora Muñoz y el ministro suplente señor Contreras, no obstante haber



concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso la primera y por estar haber terminado su periodo de suplencia el segundo. Santiago, veintidós de abril de dos mil veintidós.



En Santiago, a veintidós de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

